

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, veintiuno (21) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Apelación de Auto
Rad. 015-2021-00514-01

La Sala Quinta de Decisión Laboral resuelve el recurso de apelación interpuesto por WILLIAM ALBERTO RIVERA ZAPATA en nombre propio y de su menor hijo JERÓNIMO RIVERA AVENDAÑO frente al auto que decidió declarar próspera la excepción previa de “cosa juzgada” dentro del proceso ordinario laboral adelantado contra EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN y el CONSORCIO CCC ITUANGO conformado por las empresas CAMARGO CORREA INFRA LTDA. SUCURSAL COLOMBIA, CONINSA RAMON H S.A. y CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.

ANTECEDENTES

La parte demandante radicó el escrito inicial con el propósito que se declare en la pasiva la responsabilidad en el accidente de trabajo sufrido el 21 de octubre de 2016 para que, en consecuencia, se proceda con el reconocimiento de la indemnización por perjuicios en las modalidades de daño moral, daño a la salud y lucro cesante (Pág. 7 Archivo 01).

Una vez notificada en debida forma el libelo, la parte opositora integrada por las organizaciones que comprenden el Consorcio CCC Ituango, en igual

escrito propusieron como medio de defensa entre otros, la excepción previa de “cosa juzgada”, fundamentada en un contrato de transacción celebrado con el actor aduciendo que los derechos allí incluidos tienen el efecto pregonado.

En la audiencia del artículo 77 del CPTSS celebrada el 07 de diciembre de 2022, la *a quo*, comprendió que la excepción estaba llamada a prosperar, en la medida que desde una perspectiva global del escrito de transacción advirtió que aunque el objetivo principal era dar fin al debate judicial suscitado ante el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, la cláusula primera abarcó cualquier otra controversia que se pudiera derivar de la relación laboral cubriendo de manera expresa la indemnización plena de perjuicios que regula el artículo 216 del CST, que tiene una repercusión directa con este trámite por ser precisamente lo que se reclama, señalando por demás la viabilidad de haber transigido ese concepto.

La parte vencida en el trámite de esta excepción, interpuso recurso de apelación aduciendo que contrario a lo decidido en el asunto no tiene prosperidad la excepción propuesta en tanto la transacción se basó en lo que a la estabilidad laboral reforzada refería, pero en esta oportunidad el evento es absolutamente distinto, por cuanto lo pretendido hace alusión a una culpa patronal con el correlativo reconocimiento de unos perjuicios.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

A partir del tema objeto de apelación, le corresponde a esta Colegiatura dilucidar si se configura o no la figura de cosa juzgada que de lugar a dar razón a la directora inicial del trámite en cuanto dio por terminado el proceso.

Al respecto, sea lo primero destacar que esta Sala de decisión es competente para resolver el asunto planteado por lo previsto en el numeral 3° del artículo 65 del CPT y la SS, según el cual, el auto que decide sobre excepciones previas es recurrible vía apelación, atendiendo a que el artículo 32 del CPTS otorga la posibilidad de ser propuesta como previa la de cosa juzgada.

Pues bien, como se sabe, la configuración de la cosa juzgada se determina entre otras posibilidades cotejando una transacción que ha hecho tránsito a cosa juzgada con otro proceso, para reconocer en ellos una triple identidad: de objeto, cuando ambos versen sobre la misma pretensión; de causa, cuando tengan como sustento los mismos fundamentos o hechos jurídicos, y de partes, que implica la concurrencia al proceso de las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada (artículo 303 del CGP).

Por tanto, para que pueda afirmarse la existencia de este medio exceptivo se exige de manera perentoria y categórica, la presencia de esas tres identidades básicas.

La Sala de Casación Laboral al ocuparse de esta figura ha anotado:

“La razón de ser de la cosa juzgada está en la necesidad de ponerle fin a los conflictos, impedir su sucesivo replanteamiento por la parte desfavorecida y evitar así la incertidumbre en la vida jurídica. Ella tiene una función o eficacia negativa, como es la prohibición a los jueces para decidir sobre lo ya resuelto, esto es la inmutabilidad, y una función o eficacia positiva, como es la seguridad o definitividad que les otorga a las relaciones jurídicas sobre las que versa la decisión...” (Ver SL1199-2021)

En ese contexto, se tiene que el propósito primigenio de esta figura es evitar mantener indefinidamente en el tiempo la expectativa en torno al sentido de la solución judicial a un conflicto, y reabrir un debate para resistir decisiones verificadas en otra instancia judicial o dentro de un acuerdo conciliatorio o transaccional, resoluciones que entonces resultan inmutables, inimpugnables y obligatorias.

De ese modo, objetivamente examinado el contrato de transacción que entre las partes se sostuvo y que incluyó en iguales términos a Empresas Públicas de Medellín (págs. 24-26 Archivo 06), se tiene que los contendientes acudieron al instrumento aludido a fin de resolver el conflicto que emergió dentro del proceso ordinario laboral con radicado N° 05001-31-05-006-2018-00647-00 a través de un acuerdo amigable, donde se pretendía el reintegro de William Alberto Rivera Zapata a sus labores por cuenta de la garantía de la estabilidad laboral reforzada por razones de salud que endilgó al accidente de trabajo ocurrido el 21 de octubre de 2016, donde quedó manifiesta la negociación para consumir esa controversia, punto hasta el cual asiste razón a la representante judicial de la parte demandante, siendo el contenido de la cláusula primera el siguiente:

“OBJETO DE LA TRANSACCIÓN: La presente transacción se suscribe entre el demandante, el demandado Consorcio CCC Ituango y sus empresas consorciadas Camargo Correa Infra Construccoes S.A, Concreto S.A y Coninsa Ramón H S.A para poner fin a todas las controversias judiciales o extrajudiciales originadas o que se originen entre las partes, incluida Empresas Públicas de Medellín ESP, y que sean derivadas de la relación laboral que existió entre el demandante y el demandado CONSORCIO CCC ITUANGO y sus empresas consorciadas como son las que se debaten en el proceso judicial ordinario que cursa en el Juzgado sexto laboral del Circuito de Medellín bajo el radicado 05001 31 05 006 2018 00647 00 y otras como el pago de la indemnización plena de perjuicios prevista en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo y la seguridad Social, así como otro tipo de indemnizaciones tales como la derivada del artículo 26 de

la Ley 361 de 1996, la prevista en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, indemnización por mora en la consignación de las cesantías en un fondo administrador de las mismas, indemnización por no pago de los intereses sobre las cesantías, indemnización por mora en el pago de salarios y prestaciones sociales y cualquier indemnización derivada de una eventual indemnización por estabilidad reforzada”.

De la lectura completa del documento y del articulado transcrito se denota que la voluntad de los intervinientes excedió el escenario judicial, y extendió los efectos allí acordados a las discusiones que se originaran entre las partes entre otros conceptos al “*pago de la indemnización plena de perjuicios prevista en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo y la Seguridad Social, así como otro tipo de indemnizaciones...*”, lo que se revela se pactó a partir del mismo accidente de trabajo acaecido el 21 de octubre de 2016, disposición expresa por voluntad de las partes que permite indicar que las partes desearon dejar saldados todos los compromisos respecto de las responsabilidades patronales que pudieran surgir de ese evento laboral que de manera expresa envuelve la indemnización plena de perjuicios, petición que es la causa de lo que nos convoca en el presente litigio, queriendo decir ello, que desde el momento de la suscripción del acuerdo quedó relegada la posibilidad de volver a debatirse en el futuro, ese pedimento entre las mismas partes.

Es de trascendencia precisar que la aludida transacción cumple con la totalidad de requisitos que la Corte Suprema de Justicia en nuestra especialidad ha enlistado y que son: i) la existencia de un derecho litigioso, eventual o pendiente de resolver; ii) se trata de un derecho que no tiene la connotación de cierto e indiscutible porque no hay certeza sobre su dimensión y no se ha configurado una consecuencia jurídica¹; iii) hay ausencia de vicios del consentimiento pues no se alega siquiera de parte del promotor de la litis que se presentara al momento de la rúbrica del

¹ T-040 de 2018.

convenio error, fuerza o dolo, y iv) lo acordado propicia generar concesiones recíprocas y mutuas para las partes (Ver AL607-2017, AL1761 y SL4243-2022).

En ese orden, ningún error cometió la falladora de la primera instancia por haber inferido que en razón de la transacción celebrada entre las partes se le da el alcance de cosa juzgada y en ese orden, el fin del presente asunto se remonta es a la data de la transacción quedando la pasiva liberada de la responsabilidad que hoy se busca sea impuesta dándose lugar a la terminación definitiva del proceso.

Ahora, se precisa que la cosa juzgada parte de la potestad del actor de disponer de sus derechos a partir del accidente que ocurrió el 21 de octubre de 2016, lo que de paso cobija a los legitimados para reclamar los perjuicios que de él se deriven, pues resulta un desatino que el mismo implicado haya transado lo que derivaría en la indemnización plena de perjuicios del artículo 216 del CST redimiendo a la pasiva de este concepto, y luego, a partir de idénticas condiciones de hecho actúe en representación de su menor hijo para reclamar igual concepto pese a haberse sometido a la resolución definitiva de ese conflicto por decisión consciente de las partes, precisión con la que se ratifica la prosperidad plena de la excepción.

En consecuencia, se CONFIRMARÁ el auto recurrido. Las costas estarán a cargo de la parte demandante, fijándose las agencias en derecho en la suma de \$500.000.

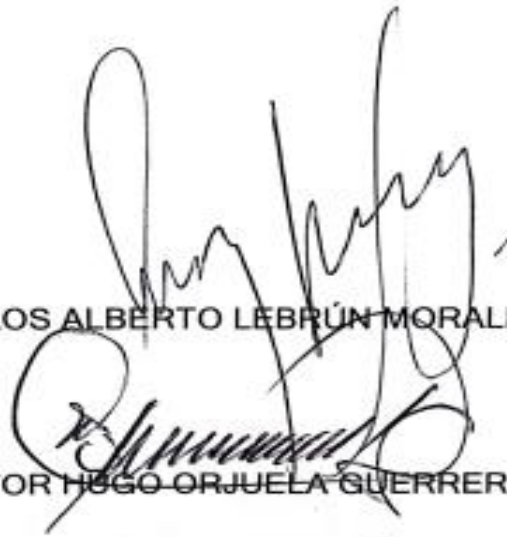
DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el auto de fecha y procedencia conocidas.

Las costas como se dijo en la parte motiva.

La presente decisión se notifica en los ESTADOS ELECTRÓNICOS.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

Se certifica: Que la sentencia anterior fue notificada por ESTADOS N° 030 fijados el 22 de febrero de 2023, en la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

El secretario.